POSIBILIDADES DE UN PROCESO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN
COLOMBIA DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE VERDAD,
JUSTICIA Y REPARACIÓN. EL CASO DE LAS AUC.

LWINNITH GIOVANNA SUÁREZ PLAZAS

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ, D. C.
JULIO DE 2006

“Posibilidades de un proceso de paz en Colombia de conformidad con los principios de verdad, justicia y reparación. El caso de las AUC”

Trabajo de grado presentado
como requisito para optar al título de
Internacionalista
en la Facultad de Relaciones Internacionales
de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentado por
Lwinnith Giovanna Suárez Plazas

Semestre II, 2006

CONTENIDO

	Pág.
GLOSARIO	
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. PAZ, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	4
1.1. LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL Y LOS PROCESOS DE PAZ	4
1.2. PAZ, JUSTICIA Y RECONCILIACIÓN	10
CAPÍTULO 2. DE LA TERAPIA DE OLVIDO HISTÓRICO A LA NEGOCIACIÓN CON LOS GRUPOS PARAMILTARES	17
2.1. DESMOVILIZACIONES, DESARMES, AMNISTÍAS E INDULTOS	17
2.2. NEGOCIACIONES A LA SOMBRA DE UN NUEVO ESQUEMA CONSTITUCIONAL Y EN BÚSQUEDA DE LA CONVIVENCIA	21
2.3. EL PROCESO DE PAZ CON LAS AUTODEFENSAS	23
2.4. LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN LOS PROCESOS DE PAZ	25
CAPÍTULO 3. ¿LEY DE JUSTICIA Y PAZ O PERPETUACIÓN DE LA IMPUNIDAD?	28
3.1. LO QUE APROBÓ EL CONGRESO	28
3.2. REACCIONES A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ	30

CAPÍTULO 4. DIFICULTADES Y POSIBILIDADES DE UN PROCESO DE PAZ EXITOSO CON LAS AUC	36
4.1. LA HISTORIA Y LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PARAMILITARES	36
4.2 LA DEBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ANTE LOS DELITOS DE LOS PARAMILITARES	38
4.3. LA POSIBILIDAD DE UN PROCESO DE PAZ CON LAS AUTODEFENSAS	41
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES	44
ANEXOS	
BIBLIOGRAFÍA	

ANEXOS

Anexo No. 1. Texto del Acta de Compromiso. Reunión de Comandantes AUC, febrero 13 de 2003.

Anexo No. 2. Texto del Acuerdo de Santafe Ralito para contribuir a la paz de Colombia.

Anexo No. 3. Convenio entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para el acompañamiento al proceso de paz en Colombia.

Anexo No. 4. Declaración AUC, Acto de fe por la paz, octubre 7 de 2004.

Anexo No. 5. Acuerdo de Caquetania. Suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP, mayo 2 de 1999.

Anexo No. 6. Texto Decreto 128 de 2003.

Anexo No. 7. Texto Ley 975 de 2005 “ley de Justicia y Paz”.

Anexo No. 8. Exposición de motivos proyecto de ley 211 de 2005 Senado “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

Anexo No. 9. Comunicado de prensa Corte Constitucional sobre la demanda a la Ley 975 de 2005 “Ley de justicia y Paz”, mayo 18 de 2006.

Anexo No. 10. Texto Ley 782 de 2002.

Anexo No. 11. Discurso del Comandante Salvatore Mancuso ante al Congreso de la República, julio 28 de 2004.

INTRODUCCIÓN

En un contexto internacional cada vez más interconectado se imponen consensos que buscan enfrentar la incertidumbre y asegurar comportamientos compatibles con procesos en los que interviene un número creciente de actores con la consiguiente recomposición de estructuras de poder en el mundo. De este modo, y con el fin de la Guerra Fría, la comunidad internacional – entiéndase por ella los Estados, los organismos internacionales y las agencias de cooperación – se ha visto en la necesidad de encontrar nuevos paradigmas que, en parte, se expresan en los llamados regímenes internacionales¹. Así mismo, con el repliegue de las grandes potencias de sus zonas de influencia, la sociedad civil ha pasado a ser uno de los principales ejes de los conflictos armados y con ella una reclamación de la paz como un nuevo derecho humano.

Desde un concepto de paz que no se limita a definirla como la sola ausencia de guerra, los derechos humanos ocupan un lugar esencial en una concepción de la paz como paz positiva. En virtud de esta nueva comprensión de la paz se abre paso el derecho a la paz como integrante de los derechos humanos de la tercera generación o derechos de la solidaridad cuyo fundamento último es el derecho a la vida en un sentido amplio.

Además de una más activa participación de los organismos internacionales y de algunos Estados en los procesos de paz y en acciones humanitarias han aparecido también organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) que buscan consolidar el papel de la comunidad internacional en la regulación de los conflictos. Tampoco pueden pasarse por alto los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 que transformaron la política exterior de los Estados Unidos con su guerra global al

¹ Se entiende por régimen internacional un conjunto de principios, normas, reglas, pautas que establecen la forma como han de relacionarse los actores internacionales atendiendo al ejercicio del poder, de acuerdo con los intereses de los actores preponderantes y que establecen métodos de resolución de los problemas que surgen de las relaciones entre los elementos que componen el sistema internacional.

terrorismo lo cual condujo a centrar la atención en los conflictos armados prolongados y los Estados fallidos.

En este contexto internacional, el conflicto colombiano, cada vez más expuesto a las consecuencias de su internacionalización, se encuentra en una encrucijada caracterizada por el intervencionismo de los Estados Unidos en la guerra al narcotráfico y la apuesta de parte de la comunidad internacional por una convivencia entre naciones soberanas con reglas claras comunes que persigan la seguridad y el desarrollo humano para lo cual exige procesos de paz fundamentados en los principios de verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Las exigencias morales de la comunidad internacional y el reclamo de justicia por parte de las víctimas, de un lado, y el imperativo de una paz sostenible, por otro, plantea el dilema entre la importancia del derecho de las víctimas a la justicia y el derecho de las víctimas a vivir en paz.

La hipótesis en la que descansa esta monografía hace referencia a que la respuesta al mismo solamente la pueden dar las víctimas para lo cual deben respetarse los derechos humanos y fortalecerse las instituciones democráticas, es decir, la participación y la deliberación.

El objetivo general de esta investigación es determinar las posibilidades de un proceso de reconciliación en Colombia, basado en los principios de verdad, justicia y reparación exigidos por la comunidad internacional, centrado en el proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con los grupos paramilitares. Como objetivo específico se busca analizar el margen de maniobra de las autoridades gubernamentales, con el propósito de plantear un modelo en el que los principios exigidos por la comunidad internacional puedan ser articulados a las necesidades del país y de este modo darle vía libre a un proceso de reconciliación que vaya más allá de un acuerdo de paz.

El trabajo es de carácter descriptivo analítico y se fundamenta en las teorías planteadas por Johan Galtung y Kjell- Åke Nordquist, principalmente, para quienes la construcción de la paz supone que se trabaje en forma simultáneamente en los planos

de la reconstrucción, la reconciliación y la solución de los conflictos subyacentes, lo que exige la participación tanto de las víctimas como de los victimarios.

En este orden de ideas, la reflexión se desarrolla en cuatro momentos: en un primer capítulo se tratan las exigencias de la comunidad internacional en materia de procesos de paz; en un segundo momento se hace un breve recuento de los procesos de paz en Colombia para demostrar por qué hoy no son posibles los indultos y las amnistías generales; en un tercer apartado se analiza la Ley de Justicia y Paz a la luz de lo planteado en los capítulos anteriores y en una cuarta y última parte se analizan tanto las dificultades como las posibilidades de un proceso de paz exitoso con las autodefensas.

CAPÍTULO 1. PAZ, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

En un mundo cada vez más integrado por la globalización, el éxito de un proceso de paz en Colombia no solamente depende de la respuesta a las necesidades del país sino del cumplimiento a los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos y del acatamiento tanto al derecho internacional humanitario como al derecho penal internacional.

En efecto, si bien todo proceso de paz está expuesto a un cierto grado de impunidad, también lo es que, debido a los cambios producidos en el sistema internacional, en la actualidad se privilegian los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. De este modo quedan descartados los indultos² y las amnistías³ generales para concertar procesos de paz que sacrifiquen los derechos de las víctimas y favorezcan a los victimarios.

Además, el recurso a indultos y amnistías entorpece los procesos de reconciliación al impedir que se conozca la verdad de los hechos que tuvieron lugar con ocasión de acciones violentas que permanecen en la impunidad. A continuación se analizan las exigencias de la comunidad internacional relacionadas con los procesos de paz en los países que salen de conflictos armados internos y las condiciones que favorecen los procesos de reconciliación.

² Villarraga Sarmiento, Álvaro. *Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Problemática y aplicación*. Tomo II. TM Editores, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Bogotá, p 209. El indulto se agota en la extinción de la pena. En él el carácter criminoso de los hechos perpetrados permanece. Así, se explica porque esta medida suele no exigir la obligación de reparación del daño causado a las víctimas en cabeza del victimario.

³ Ver Villarraga Sarmiento, Álvaro. *Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Problemática y aplicación*, p 208. La amnistía en términos jurídico penales, comporta la descriminalización, no sólo la extinción de la pena sino también de la acción penal, y con ella el restablecimiento pleno de la simetría moral y jurídica.

1.1 LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL Y LOS PROCESOS DE PAZ

Una de las preocupaciones que ha ido tomando vuelo en el seno de la comunidad internacional es no dejar impunes los crímenes de lesa humanidad en la medida en que éstos ofenden la conciencia ética del género humano y niegan la vigencia de las normas indispensables para una convivencia civilizada.

“Hoy más que nunca, se considera que la soberanía de los Estados, junto al principio de no intervención en los asuntos internos de terceros Estados, no constituyen barreras infranqueables a la acción de la comunidad internacional cuando quiera que se presenten verdaderos abusos y violaciones masivas a las normas y principios del derecho internacional humanitario (...)”⁴.

Es así como, tanto el derecho internacional consuetudinario (prueba de una práctica generalmente aceptada de derecho⁵) como los principios de derecho internacional⁶ han tipificado como crímenes de lesa humanidad diversos atentados a los derechos fundamentales del ser humano como el genocidio, la desaparición forzada y la tortura, prácticas que caracterizan el conflicto armado que padece Colombia desde hace más de cincuenta años.

El que los crímenes de lesa humanidad hayan sido calificados de crímenes de derecho internacional tiene efectos importantes para los Estados. En efecto, del principio de persecución obligatoria de estos crímenes, establecido en la Convención contra el Genocidio de diciembre de 1948 y confirmado por el Tribunal Permanente de los Pueblos en su sesión de abril de 1991 que trató el tema de la impunidad, se desprende la obligación internacional de reprimir dichos crímenes.

⁴ Romelli, Alejandro. *Derecho Internacional Humanitario y estado de beligerancia*. Universidad Externado de Colombia. Serie Teoría jurídica y filosofía del derecho, No. 12. Bogotá, julio de 1999, p 137.

⁵ Lefranc, Sandrine. *Políticas del perdón*. Editorial Norma. Bogota D.C., 2005, p 97.

⁶ Ver Lefranc Sandrine. *Políticas del perdón*, p 98 Reconocidos en forma explícita como una fuente directa de derecho internacional con independencia de cualquier autorización convencional.

Esta obligación significa que los Estados deben investigar, juzgar y condenar a los culpables de graves o sistemáticas violaciones de los derechos humanos fundamentales. En otros términos, los crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional, no pueden ser amnistiados ni indultados así como a sus responsables no se les puede otorgar el asilo territorial ni la calidad de refugiados políticos.

En el curso de los últimos años han surgido diferentes tipos de tribunales internacionales que incluyen los tribunales *ad hoc* implementados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, creado en 1993, y el tribunal Penal Internacional para Rwanda, creado en 1994) y tribunales mixtos, como el establecido en Sierra Leona, compuestos de jueces nacionales e internacionales.

En el continente americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han tomado decisiones trascendentales que han revertido la aplicación de leyes de amnistía en procesos de transición hacia la paz y dado lugar a investigaciones de violaciones de derechos humanos.

Entre los organismos internacionales competentes para juzgar las violaciones a los derechos humanos se encuentra la Corte Penal Internacional⁷, a la que dió vida la firma del Estatuto de Roma en agosto de 1998. Desde sus inicios en 2002, la CPI ha pasado a ser el principal instrumento internacional para el procesamiento de crímenes de guerra en una corte internacional; tiene la ventaja de ser un organismo permanente, no poseer restricciones geográficas y su jurisdicción abarca los conflictos armados internos.

La Corte Penal Internacional reconoce la responsabilidad del individuo; por lo tanto, es competente para juzgar personas que hayan cometido crímenes de lesa

⁷ Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos. *Compilación de Derecho Penal Internacional. El Estatuto de Roma y otros instrumentos de la CPI*. Organización de Naciones Unidas. Bogotá, abril de 2003, p 311. La creación de una CPI de carácter permanente e independiente es el resultado de un prolongado proceso de construcción de consensos en el seno de la comunidad internacional en torno a la necesidad de garantizar la protección efectiva de la dignidad humana frente a actos de barbarie y de proscribir los más graves crímenes internacionales.

humanidad y crímenes de guerra. Su actuación es complementaria de la justicia nacional, motivo por el cual sólo interviene cuando la justicia local, por omisión o por incompetencia, no juzga de manera satisfactoria a quienes se configuren como victimarios.

Colombia es signataria del Estatuto de Roma y lo ratificó en 2002, por lo que no puede eludir la aplicación de su jurisdicción. Sin embargo, dado que la jurisdicción de la Corte no es aplicable retroactivamente, solamente puede juzgar crímenes perpetrados después del 1 de julio de 2002; además, Colombia invocó el artículo 124⁸, que impide la aplicación de la CPI hasta pasados siete años de su ratificación.

La lucha contra la impunidad que ha acompañado a la legislación internacional vincula el combate contra aquella a la justicia y a la búsqueda de la verdad, dado que un presupuesto de la justicia es encontrar la verdad así como que ésta se socialice, que se haga pública, para signar responsabilidades. El no hacerlo es permitir la impunidad, es decir, dejar sin castigo lo que debe ser objetado, sancionado, reparado y corregido jurídicamente para asegurar que los hechos investigados no se vuelvan a repetir. Con base en este criterio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al examinar las leyes de amnistía promulgadas en Uruguay y Argentina, consideró que violaban el derecho que tenían los familiares de los desaparecidos a saber la verdad y las objetó.

Otro punto planteado con insistencia por las instancias internacionales es el derecho a la reparación, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por reparaciones se entiende medidas de indemnización o

⁸ Estatuto de Roma, artículo 124, “Disposición de transición: No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12, un Estado, al hacerse parte en el Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 (crímenes de guerra) cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. La declaración formulada de conformidad con el presente artículo podrá ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo será reconsiderado en la Conferencia de Revisión que se convoque de conformidad con el párrafo 1 del artículo 123.

compensación a favor de las víctimas de crímenes perpetrados durante conflictos armados; pueden tener carácter material o simbólico y comprender desde indemnizaciones pecuniarias hasta el ofrecimiento de disculpas oficiales y la erección de monumentos o el establecimiento de días de conmemoración.

En consonancia con lo acordado en el ámbito internacional, se ha considerado que si un gobierno no procede a castigar a los perpetradores de violaciones flagrantes de derechos humanos en el país donde se cometieron los crímenes, compete a los tribunales internacionales de jurisdicción universal emprender las investigaciones correspondientes. Ahora bien, tal como lo destaca Judy Meltzer, “[Estos] procesos se enfrentan a la dificultad de hallar un equilibrio entre la administración de justicia y el logro de la paz. En aras de tal objetivo y para facilitar la transición hacia la paz a menudo se sacrifican principios de justicia y se hace inevitable otorgar ciertos tipos de amnistías”⁹. De hecho, fue lo que sucedió en procesos como los que se adelantaron en Argentina, Chile, El Salvador y Guatemala¹⁰.

A pesar de que las amnistías han sido fuertemente criticadas por algunos sectores porque no corren el velo de la impunidad al no dejar conocer la verdad, es frecuente escuchar la tesis de que para que los procesos de reconciliación sean posibles se deben tolerar algunos márgenes de impunidad.

El argumento se centra en la tesis según la cual los actores armados al margen de la ley no estarían dispuestos a firmar un tratado de paz si se les exige reconocer su responsabilidad en los “desmanes” delictivos; este planteamiento tiene como consecuencia que el clamor de justicia de las víctimas o de los defensores de derechos humanos sea considerado como un conjunto de voces que van en contra de la paz. El balance entre el deber de castigar y los límites reales de la justicia, o entre la demanda

⁹ Meltzer, Judy. “Justicia transicional y reconciliación en Colombia luego del conflicto armado: consideraciones para una posible cooperación canadiense”, julio de 2004, disponible en <http://www.focal.ca/pdf/colombia04>, p 3.

¹⁰ Ver Meltzer, Judy. “Justicia transicional y reconciliación en Colombia luego del conflicto armado: consideraciones para una posible cooperación canadiense”, p 9. La autora hace referencia a las amnistías otorgadas a perpetradores de violaciones a los derechos humanos donde se generó una situación de ventaja para los acusados sobre las víctimas; especialmente en casos de reparaciones inadecuadas.

de justicia y la necesidad de construir una sociedad justa, es un obstáculo que sólo la sociedad puede saldar.

Recurrir al pragmatismo en forma inconsulta en aras de una hipotética reconciliación, argumentando que es imposible erradicar totalmente la impunidad, es justificarla de antemano y conspirar contra lo posible, incluso contra lo necesario para superarla. Por ello se ha planteado por diversos canales que para negociar un acuerdo de paz es importante introducir lineamientos y limitaciones estrictos con el apoyo de instancias internacionales. Así mismo, que para suplir las carencias y las debilidades de los tribunales nacionales se debe recurrir a instrumentos internacionales que puedan apoyar el proceso de paz o servir de recurso alternativo¹¹.

El recurso a las instancias internacionales para procesar a los criminales de guerra tiene ventajas y desventajas. Tal como lo ha anotado Judy Meltzer, los tribunales internacionales *“pueden aportar, tanto en apariencia como en la práctica, un elemento de legitimidad y neutralidad, y evitar que se aplique la justicia del vencedor en los juicios (en contraposición a la parcialidad nacional/estatal), importante para la percepción de que se hace justicia”*¹².

Tampoco puede perderse de vista que la jurisdicción internacional *“en algunos casos posee también mayor capacidad y recursos que estados donde las instituciones jurídicas democráticas son extremadamente frágiles o inexistentes”* sin contar con que *“hay menos probabilidades de que los tribunales internacionales sucumban a la influencia o amenazas de actores armados [mientras] su propia existencia puede servir de factor disuasivo para futuros perpetradores, además de proporcionar mayores garantías de que se respeten las normas internacionales y los derechos humanos”*¹³.

¹¹ Ver Meltzer, Judy. “Justicia transicional y reconciliación en Colombia luego del conflicto armado: consideraciones para una posible cooperación canadiense”, p 4.

¹² Ver Meltzer, Judy. “Justicia transicional y reconciliación en Colombia luego del conflicto armado: consideraciones para una posible cooperación canadiense”, p 4.

¹³ Ver Meltzer, Judy. “Justicia transicional y reconciliación en Colombia luego del conflicto armado: consideraciones para una posible cooperación canadiense”, p 4.

Por otro lado, también es evidente que los tribunales internacionales tienen limitaciones para satisfacer las expectativas de justicia pues su capacidad para sancionar y asegurar el cumplimiento de sus fallos es restringida; además, sólo pueden juzgar un pequeño número de acusados – principalmente de alto rango – en lugar de la totalidad de los criminales, lo cual limita su contribución a la reconciliación nacional¹⁴. No obstante, y a pesar de sus limitaciones, los tribunales internacionales, además de servir de guía para la comunidad internacional, han sentado precedentes que el Estado colombiano no puede ignorar.

1.2 PAZ, JUSTICIA Y RECONCILIACIÓN

La obligación de castigar los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos no se puede negociar ni exonerar por razones de interés político. Un Estado que prohíba la impunidad es un Estado que patrocina la injusticia y la mayor certeza que produce la injusticia es la fragilidad del orden existente. Por ello la paz debe alcanzarse en el marco de la verdad y la justicia así ésta, por sus limitaciones, no cobije a todos los responsables de crímenes de lesa humanidad.

La búsqueda de la paz, empero, no tiene como propósito final el castigo de los culpables sino la reconciliación y ésta supone se conozcan las distintas verdades para lo cual es importante escuchar todas las voces. Una sociedad afectada por el temor y el silencio como la colombiana requiere su reestructuración y una recomposición del Estado.

La paz, el perdón y la reconciliación hacen parte de un proceso que sólo puede ser evaluado plenamente por quienes han sido víctimas directas de la violencia. El perdón y la reconciliación no pueden imponerse y, menos aún, por quienes han sido

¹⁴ Ver Meltzer, Judy. “Justicia transicional y reconciliación en Colombia luego del conflicto armado: consideraciones para una posible cooperación canadiense”, p 4. Se reconocen también como limitantes de los tribunales internacionales el hecho de que tienen lugar fuera del contexto nacional y por períodos de tiempo que pueden ser demasiado extensos.

los autores de la violencia. En este sentido, la verdad debe ser el primer paso para que el país se encamine hacia un proceso de reconstrucción democrática que incluya a quienes hoy están excluidos y marginados del devenir de la nación.

La historia del país nos lleva a reconocer que la paz no se logra con la suscripción de acuerdos que manifiestan poner fin a la violencia pero no profundizan en las causas que han generado el conflicto.

La auténtica posibilidad para que los colombianos alcancemos la paz es que nos apartemos de la espiral de la violencia y reconozcamos en los demás el valor de su existencia y el derecho a una vida digna, con autonomía, identidad y libertad. En otros términos, no puede exaltarse cualquier tipo de paz, menos una paz impuesta. La paz, para que sea duradera, debe ser considerada como un valor que conjuga y posibilita la vigencia plena de los derechos humanos.

El concepto de justicia que prima hoy en la solución de los conflictos internos y la desmovilización de los grupos armados es el de justicia transicional que relaciona los principios de verdad, justicia y reparación con el ofrecimiento de beneficios e incentivos para alcanzar la paz y la reconciliación. En este marco, caracterizado por una concepción de justicia restaurativa que no punitiva, el otorgamiento de beneficios judiciales queda sujeto al esclarecimiento de los hechos y crímenes cometidos así como a la reparación a las víctimas¹⁵.

Al amparo de la jurisdicción internacional y de la experiencia histórica, las comisiones de la verdad son consideradas hoy como uno de los instrumentos fundamentales para los procesos de paz, no como sustitutos de los procesos judiciales, sino como componentes integrales y complementarios de la reconciliación.

En efecto, su misión fundamental es la de generar confianza en el seno de la sociedad en la medida que coadyuvan a promover una paz sostenible y general por encima de la justicia particular. Dependiendo de las circunstancias, las comisiones de la verdad han sido concebidas de diversas formas: desde investigaciones oficiales de

¹⁵ Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Sin la verdad no puede haber justicia y reparación, ni paz y reconciliación”. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bogotá D.C., junio de 2005, disponible en <http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2005/cp0534.pdf>, p 2.

violaciones a los derechos fundamentales y vinculadas a procesos judiciales, hasta iniciativas no gubernamentales de documentación de transgresiones y abusos por parte de actores estatales y no estatales.

De acuerdo con los expertos en resolución de conflictos, las comisiones de la verdad¹⁶ contribuyen al logro de la justicia y la reconciliación de varias maneras. En particular, crean un espacio para la expresión del sufrimiento de las víctimas; permiten identificar la responsabilidad colectiva e institucional por las transgresiones de los derechos humanos, más allá de los procesos legales cuya jurisdicción se restringe a individuos; pueden contribuir al desarrollo de procesos judiciales o a incrementar la probabilidad de procesamientos futuros; contribuyen a una comprensión general del pasado y permiten la cooperación para resolver problemas que afectan de manera conjunta a los actores en pugna¹⁷.

A pesar de sus ventajas, las comisiones de la verdad presentan riesgos y generan polémicas. En realidad, sacar a la luz pública la verdad puede dar lugar a conflictos y venganzas; además, revelar el pasado conlleva procesos dolorosos que reviven momentos pasados y se presta a reinterpretaciones y cuestionamientos.

La experiencia internacional muestra, así mismo, que el éxito de las comisiones de la verdad depende de factores tales como el tiempo, los recursos disponibles (tanto materiales como humanos), la existencia de un consenso político en torno a su existencia, la independencia operativa de las mismas y la puesta en práctica de sus recomendaciones¹⁸. El propósito de las comisiones de la verdad, concebidas como instrumentos de paz, pasa por la definición clara de su misión,

¹⁶ Springer, Natalia. *Sobre la verdad en los tiempos del miedo: del establecimiento de una comisión de la verdad en Colombia y los desafíos para la justicia restaurativa*. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, mayo de 2002, p 85. De acuerdo con Hayner, una comisión de verdad es una institución de carácter temporal, establecida a través de un acto oficial del Estado y encargada se investigar asesinatos políticos, actos de tortura y toda suerte de violaciones masivas a los derechos humanos ocurridas en el pasado.

¹⁷ Ver Meltzer Judy. “Justicia transicional y reconciliación en Colombia luego del conflicto armado: consideraciones para una posible cooperación canadiense”, p 8. Entre otras posibilidades que ofrecen las comisiones de verdad se encuentran la oportunidad de ofrecer recomendaciones a los procesos de reconciliación y el establecimiento de estructuras de financiamiento.

¹⁸ Ver Meltzer Judy. “Justicia transicional y reconciliación en Colombia luego del conflicto armado: consideraciones para una posible cooperación canadiense”, p 8.

comenzando por el concepto de paz que se quiere concretar en prácticas e instituciones específicas.

De hecho, la palabra “paz” es polisémica. Así, por ejemplo, el término *pax*, proveniente del latín, se encuentra vinculado al de pacto (*pactum*), lo que indica que, desde esta perspectiva, la paz representa la idea de respetar lo legal y encarna la ley y el orden. Para los hebreos, el término *shalom* significa bienestar material, prosperidad, y cobra verdadero significado en un contexto de estructuras que regulan las relaciones de la comunidad.

Desde el punto de vista lingüístico, el uso del término ha permitido a autores como Johan Galtung, diferenciar dos grandes concepciones, la negativa y la positiva, emparentadas con dos definiciones de la violencia: la directa y la estructural.

La paz negativa pone el énfasis en la ausencia de guerra y de violencia directa. De alguna manera, presupone un aparato militar que garantice el orden, disuada al enemigo y garantice un *statu quo*. La paz positiva, tal como la ha definido Johan Galtung, reconoce un nivel reducido de violencia directa y un elevado nivel de justicia; supone la eliminación de la violencia estructural que genera las situaciones que no permiten satisfacer las necesidades humanas básicas vinculadas a la pobreza, la alienación y la represión que fomenta la intolerancia. La paz positiva se articula obligatoriamente a un proyecto de sociedad y a un modo fundamental de resolver los conflictos.

En el momento actual, hablar de paz positiva es referirse a una sociedad democrática, respetuosa de las diferencias, fundamentada en los derechos humanos. Concebida como un proceso de socialización que se materializa en acciones concretas, la paz positiva se identifica con cursos de acción política cuya finalidad es eliminar las estructuras que generan desequilibrios y situaciones perjudiciales para la colectividad.

Para Galtung, la diferenciación entre paz negativa y paz positiva es fundamental por cuanto “la palabra *paz* la utilizan tanto los ingenuos que confunden la ausencia de violencia directa con la paz y no comprenden que el trabajo de hacer y construir la paz está a punto de comenzar como los menos ingenuos que saben eso y

no quieren que ese trabajo empiece. Así la palabra *paz* se convierte en un muy eficaz instrumento de bloqueo de la paz”¹⁹.

Según Galtung, la enorme complejidad de los problemas y oportunidades que emergen de la violencia y la guerra se puede reducir a tres ingredientes, a saber: el problema de la reconstrucción (tras la violencia directa), el problema de la reconciliación (de las partes en conflicto) y el problema de la resolución del conflicto subyacente (raíz del conflicto)²⁰. Estos tres planos se interrelacionan y se confunden en uno en el que todas las partes se encuentran como agresores y víctimas a la vez²¹, por lo que la construcción de la paz supone que se trabaje en los tres paralelamente.

Finalmente, tal como lo afirma Vincenç Fisas “Para Galtung y otros investigadores, la paz es también la condición, el contexto, para que los conflictos puedan ser transformados creativamente y de forma no violenta, de tal manera que creamos paz en la medida que somos capaces de transformar los conflictos en cooperación, de forma positiva y creadora, reconociendo a los oponentes y utilizando el método del diálogo”²².

Con respecto a la reconciliación, Galtung considera que es “un tema con hondas raíces psicológicas, teológicas, filosóficas y profundamente humanas”²³, razón por la cual no existe una fórmula mágica que permita el éxito total. Para él, “*reconciliación = cierre + curación*, cierre en el sentido de que no se reabran las hostilidades, curación en el sentido de ser rehabilitados”²⁴; además, la misma complejidad del tema ha favorecido distintos enfoques o métodos para lograr la reconciliación, si bien “no existe una panacea”.

Tomados individualmente, ninguno de estos enfoques es capaz de manejar la complejidad de la situación después de la violencia, sanando heridas de tantos tipos,

¹⁹ Johan Galtung. *Tras la Violencia, 3R: Reconstrucción, Reconciliación, Resolución*. Bakeaz – Gernika Gogoratuz. Bilbao, 1998, p. 13.

²⁰ Ver Johan Galtung. *Tras la Violencia, 3R: Reconstrucción, Reconciliación, Resolución*, p 17.

²¹ Ver Johan Galtung. *Tras la Violencia, 3R: Reconstrucción, Reconciliación, Resolución*, p 109.

²² Fisas, Vincenç. *Cultura de paz y gestión de conflictos*. Icaria Editorial, S.A., Ediciones UNESCO. Barcelona, noviembre de 2002, p 19.

²³ Ver Johan Galtung. *Tras la Violencia, 3R: Reconstrucción, Reconciliación, Resolución*, p 77. En cuanto a estas raíces el autor reconoce que nadie sabe cómo materializarlas, lo cual dificulta el proceso.

²⁴ Ver Johan Galtung. *Tras la Violencia, 3R: Reconstrucción, Reconciliación, Resolución*, p 77.

cerrando los ciclos de violencia, reconciliando a las partes consigo mismas, mutuamente y con cualquier otra fuerza superior que pueda haber... [en la medida en que] todas están incrustadas en densas redes de suposiciones, algunas de ellas culturales”. Por ello, “combinándolos entre sí, estos métodos pueden tener más sentido. El problema es diseñar buenas combinaciones para una situación dada, y eso, evidentemente, requiere conocimientos, destrezas y experiencia”²⁵.

Para Galtung, la construcción de la paz implica rehabilitación para sanar las heridas, reconstrucción de los vínculos rotos, reestructuración dirigida a eliminar la exclusión social y sustitución de una cultura de violencia por una cultura de paz. El cumplimiento de estas tareas necesita “un diálogo nacional con participación ciudadana generalizada. Nadie tiene el monopolio de la definición del objetivo del desarrollo, y todo el mundo tiene derecho a participar en el proceso”²⁶.

Según Kjell-Åke Nordquist, del Departamento de Investigación sobre Paz y Conflicto de la Universidad de Uppsala, el principal reto a enfrentar es “diseñar un proceso de reconciliación que se integre con otras partes del proceso de paz y que, por consiguiente, se convierta en un proceso por derecho propio”²⁷. En palabras de Nordquist, “la reconciliación representa un proceso y a la vez una meta de dicho proceso. Como proceso, involucra una serie de componentes de carácter político, social y legal; en la práctica,...la reconciliación ha llegado a incluir el reconocimiento de las víctimas, así como el relato de la verdad, la justicia y la reparación”²⁸.

Agrega Nordquist que, contrariamente al perdón, la reconciliación no es un proceso individual en su totalidad sino un “concepto relacional” que requiere reciprocidad para ser significativo²⁹. Por lo tanto, la pregunta clave es “¿Bajo qué

²⁵ Ver Johan Galtung. *Tras la Violencia, 3R: Reconstrucción, Reconciliación, Resolución*, p 198

²⁶ Ver Johan Galtung. *Tras la Violencia, 3R: Reconstrucción, Reconciliación, Resolución*, p 70.

²⁷ Kjell-Åke Nordquist, “La reconciliación como concepto político: algunas observaciones y comentarios”. Uppsala, Suecia, 2005. Documento inédito, p 8.

²⁸ Ver Kjell-Åke Nordquist, “La reconciliación como concepto político: algunas observaciones y comentarios”, p 9.

²⁹ Ver Kjell-Åke Nordquist, “La reconciliación como concepto político: algunas observaciones y comentarios”, p 13.

circunstancias puede iniciarse la reconciliación como una parte eficaz de un proceso de paz?”³⁰.

Dado que el propósito de un proceso de paz es sobreponerse a las divisiones, el proceso de reconciliación no puede ser “secuestrado” por un partido para fines políticos; tampoco requiere un acuerdo firmemente establecido a nivel nacional pero sí un grado de cambio fundamental que se haga público. “De este modo, los procesos de reconciliación en medio de la violencia continua pueden darse en ciertas regiones, entre ciertos actores y en ciertas dimensiones, como una manera de demostrar lo que esto puede significar para una nación entera”³¹.

En suma, la mejor garantía para alcanzar la justicia y el respeto de los derechos humanos es conseguir una paz sostenible pero ésta no se decreta, se construye. En el contexto colombiano, la construcción de la paz depende de la existencia de espacios para actuar y del fortalecimiento de instituciones que permitan organizar la convivencia en el desacuerdo y la discrepancia permanentes.

En otros términos, la puesta en marcha de la paz positiva en Colombia implica la definición de un proyecto nacional así como el desarrollo de una cultura democrática y una sociedad de ciudadanos que se conciban como constructores de su propia sociedad.

En términos concretos, dado que para actuar sobre los conflictos es necesario considerar conjuntamente factores estructurales (intereses) y psicoculturales (interpretaciones y emociones), las acciones que se emprendan en el marco de proyectos inspirados en el propósito de eliminar las estructuras que fomentan la violencia directa deben orientarse a identificar las causas para adelantar en forma mancomunada la explicación de los vínculos entre el mundo real y el mundo deseado; establecer compromisos por parte de los distintos actores vinculados a la superación de los conflictos; concebir mecanismos de veeduría y control social sobre las acciones concertadas para modificar situaciones de injusticia e inequidad.

³⁰ Ver Kjell-Åke Nordquist, “La reconciliación como concepto político: algunas observaciones y comentarios”, p 14.

³¹ Ver Kjell-Åke Nordquist, “La reconciliación como concepto político: algunas observaciones y comentarios”, p 14.

CAPÍTULO 2. DE LA TERAPIA DE OLVIDO HISTÓRICO A LA NEGOCIACIÓN CON LOS GRUPOS PARAMILTARES

La historia de Colombia cuenta con una larga tradición de violencia política y enfrentamientos armados pero también de pactos de paz, armisticios, amnistías e indultos. A continuación se hace un breve recuento de los últimos sesenta años de la vida del país vinculada a la historia del conflicto armado que no se ha podido resolver y que ha dado lugar a una creciente presencia de la comunidad internacional en los intentos por concretar una solución negociada a este conflicto³².

2.1 DESMOVILIZACIONES, DESARMES, AMNISTÍAS E INDULTOS

Si se toma en cuenta el conflicto armado³³ al cual se le busca solución desde hace décadas, se puede considerar que sus raíces se remontan al 9 de abril de 1948 cuando fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán dando inicio a lo que el país conoce como La Violencia. Al desencadenamiento de una guerra no declarada desde el gobierno conservador de la época con participación de la policía y de grupos de civiles contra el campesinado liberal sucedió la aparición de guerrillas liberales que prestaron una fuerte resistencia en los Llanos Orientales y otras regiones, particularmente en el Tolima, Cundinamarca, el eje cafetero, el Magdalena Medio, Santander y Antioquia.

Al asumir el poder el general Gustavo Rojas Pinilla en 1953 fue proclamada la paz y se decretaron amnistías tanto para los alzados en armas como para la Fuerza Pública, lo que condujo a la desmovilización y desarme de la mayoría de las guerrillas liberales.

³² Villarraga Sarmiento, Álvaro. “Procesos de Paz, desarme y reinserción en Colombia”. Publicado en *Desmovilización, un camino hacia la paz*,. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá, 2005. La mayoría de los datos consignados en este aparte fueron tomados de esta fuente.

³³ Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. *Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia: callejón con salida*. Colombia 2003, p 26. El conflicto tuvo origen en la disputa entre liberales y conservadores, la que a su vez, derivó y agudizó problemas como el conflicto agrario, el problema de la concentración de la tierra, la desigualdad y las luchas sociales.

Las guerrillas de influencia comunista y algunos núcleos guerrilleros liberales que desconfiaron de la política del gobierno mantuvieron su presencia armada en varias zonas del país, particularmente en zonas de colonización donde se habían refugiado campesinos desplazados por la misma violencia. Los resultados de la amnistía fueron exiguos y la persecución a los que se habían levantado contra las instituciones se prolongó durante varios años; Guadalupe Salcedo, el legendario jefe guerrillero, fue asesinado en una calle de Bogotá en 1957; Dumar Aljure fue muerto en un operativo militar en 1968.

Al iniciarse el régimen bipartidista del Frente Nacional, el presidente Alberto Lleras recurrió a pequeños acuerdos con los grupos guerrilleros que mantenían su oposición armada al régimen. Aplicó la amnistía a los guerrilleros y ejerció la represión contra los bandoleros. La persecución contra el bandolerismo, producto de la progresiva desmovilización de las fuerzas guerrilleras y de la carencia de políticas de reinserción, provocó excesos que afectaron a la población campesina.

A pesar del trauma causado por la violencia, el Frente Nacional pretendió aplicar una “terapia de olvido histórico”; se buscó una reconciliación sin hacer referencia a los hechos sucedidos y se impuso un perdón basado en la impunidad. Esta política que se negaba a reconocer culpables fue rechazada por varios sectores. La publicación en la década de los sesenta del informe sobre “La violencia en Colombia”, realizado por Monseñor Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna generó una honda polémica en el país.

Durante el mandato del presidente Guillermo León Valencia se inició una nueva fase del conflicto armado al montarse cercos de aniquilamiento a las zonas de autodefensa campesina denominadas “repúblicas independientes”, lo que dio origen a movimientos armados como las FARC, el ELN y el EPL.

A finales de los años sesenta se consolidó en América Latina la doctrina de seguridad nacional de la que se derivó el concepto de “enemigo interno” el cual transgredió el principio humanitario de distinción entre combatientes y población civil y extendió el combate al comunismo y la protesta social. Los grupos rebeldes extendieron el concepto de enemigo militar al de “enemigo de clase”, transgrediendo

el principio de distinción con métodos como la llamada “limpieza de territorios” para atacar a todos los que presumía colaboradores del otro bando.

En 1970, el ex general Rojas Pinilla, en ese entonces máximo dirigente de la ANAPO, disputó las elecciones presidenciales con Misael Pastrana Borrero, último candidato oficial del Frente Nacional. Según distintas versiones, ganó los escrutinios pero fue privado de la victoria, lo que originó el nacimiento del M19.

Durante la década de los ochenta se intensificó el conflicto armado pero también surgieron las primeras expresiones de diálogo entre las partes y propuestas de una solución política negociada. El presidente Betancur sostuvo que el conflicto se debía a “causas objetivas y causas subjetivas” y reconoció que la paz implicaba concesiones por lo cual puso en pie el “Plan Nacional de Rehabilitación”. En 1982 aprobó la Ley 35³⁴ de amnistía general, organizó la Comisión de Paz y adelantó una reforma constitucional que culminó en 1985 con la elección popular de alcaldes.

La amnistía decretada por el presidente Betancur produjo escasos resultados en materia de desmovilización y desarme pero permitió suscribir con la guerrilla pactos bilaterales de cese al fuego. Estos pactos contenían compromisos sobre garantías políticas lo que permitió que las FARC prohicieran un movimiento legal que dio origen a la Unión Patriótica (UP), y que con el M19 y el EPL se convocara una Mesa de Diálogo Nacional que culminó con compromisos de las partes que condenaron el secuestro, la desaparición forzada y el terrorismo.

El diálogo nacional fracasó porque las dirigencias políticas tradicionales y los gremios importantes consideraron que las concesiones que solicitaban las guerrillas eran inaceptables. Además, las comisiones de verificación no cumplieron su cometido y las guerrillas continuaron su expansión realizando secuestros y extorsiones. En un contexto cada vez más tenso se rompió la tregua entre sucesivos incidentes que culminaron con el asesinato del vocero del EPL, Oscar William Calvo, y la toma del Palacio de Justicia por el M19.

³⁴ Villamizar, Darío. “Un adiós a la guerra. Memoria histórica de los procesos de paz en Colombia”. Planeta Colombiana Editorial S.A., Santa Fe de Bogotá, 1997, p 98. Esta ley no contemplaba la entrega de armas como requisito para ser beneficiario, razón por la cual no contó con una gran acogida por parte de la sociedad.

Rota la tregua con el M19 y el EPL, las FARC se empeñaron en mantenerla y firmaron un Protocolo de Ratificación con el gobierno de Virgilio Barco en 1986, pero después de varios incidentes con la fuerza pública retomaron la acción ofensiva y se dedicó a organizar la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar. De otro lado, la UP fue objeto de una persecución sistemática: muchos de los amnistiados fueron asesinados o tuvieron que refugiarse en el exterior.

Al terminar la década de los ochenta las guerrillas habían extendido sus frentes como también se habían incrementado los homicidios políticos, las desapariciones y la utilización de métodos ilegales de represión. Así mismo, proliferaron los grupos paramilitares. En medio de un ambiente cada vez más tenso, el presidente Barco encomendó a una misión académica hacer recomendaciones para poner fin a la violencia desatada y ésta le propuso desarrollar negociaciones con la guerrilla, atendiendo las presiones que surgían desde los partidos políticos y las organizaciones sociales para que el gobierno iniciara diálogos de paz. Fue así como propuso la llamada “Iniciativa para la Paz” dirigida a conseguir la desmovilización de la guerrilla. Con base en esta propuesta, el M19 decidió iniciar negociaciones en forma directa con el Gobierno Nacional. Después de varios acuerdos parciales, el gobierno y el M19 suscribieron un pacto político y, posteriormente, un acuerdo final de paz que permitió impulsar iniciativas legislativas, el inicio de programas de reinserción y el reconocimiento del M19 como partido político legal.

La coyuntura que marcó las elecciones presidenciales de 1990 fue dramática. En un momento de violencia exacerbada y de crisis de gobernabilidad fueron asesinados tres candidatos presidenciales e irrumpió un movimiento estudiantil que promovió una Asamblea Nacional Constituyente mientras el EPL, conjuntamente con el PRT y el MQL, reclamó adelantar negociaciones de paz en directa relación con la concreción del proyecto constituyente. A pesar de la oposición de los partidos tradicionales, se abrió la posibilidad de la Constituyente en las postrimerías del mandato del presidente Barco y se iniciaron los primeros acuerdos entre el Gobierno y las guerrillas del EPL, el PRT y el MQL.

Los acuerdos de paz se dieron de manera escalonada y los tres movimientos lograron participar en la Constituyente. Junto con los acuerdos se llegó a nuevos compromisos en materia de reinserción que contemplaron la expedición de decretos de indulto, el apoyo a inversiones en las áreas afectadas, el desarrollo de programas en beneficio de los ex combatientes y compromisos relativos a los derechos humanos. Con el EPL y el MQL se conformó la Comisión de Superación de la Violencia y con el PRT la Comisión de Derechos Humanos de la Costa Atlántica.

En el ambiente de optimismo y reconciliación que generó el proceso que condujo a la Constitución de 1991, pero enrarecido por la tensión que generaba la “guerra” contra Pablo Escobar, se produjo la desmovilización unilateral de aproximadamente dos centenares de miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, sin que de parte del gobierno de César Gaviria se reconociera interlocución directa ni reconocimiento del personal desarmado a los programas de reinserción. En esta desmovilización incidieron como facilitadores ante funcionarios del gobierno nacional algunos dirigentes del M19 que pensaban que el proceso de paz podía estimular la desmovilización del paramilitarismo.

2.2 NEGOCIACIONES A LA SOMBRA DE UN NUEVO ESQUEMA CONSTITUCIONAL Y EN BÚSQUEDA DE LA CONVIVENCIA

La Constituyente permitió también una cierta distensión respecto del conflicto armado y de la lucha contra el narcotráfico. En efecto, se produjeron los diálogos en Caracas con las FARC y el ELN mientras los narcotraficantes negociaban con el gobierno. El resultado fue que algunos grupos se acogieron a decretos de sometimiento a la justicia. Así mismo, agentes del paramilitarismo, vinculados a la explotación de esmeraldas suscribieron un pacto de paz en Boyacá luego de cruentos choques.

Sin embargo, y a pesar de que a instancias del proceso constituyente se dieron diálogos de paz con las FARC y el ELN, no hubo resultados positivos y las hostilidades se intensificaron a partir de 1992. El gobierno de Gaviria declaró la

“guerra integral” si bien algunos frentes guerrilleros adhirieron a los acuerdos de paz antes suscritos. De este modo, un sector del ELN denominado Corriente de Renovación Socialista (CRS) se separó de este movimiento y concertó un acuerdo final de paz en 1994. Por su lado, algunos núcleos minoritarios de guerrilleros del EPL que no se habían acogido al acuerdo de paz antes referido lo hicieron con posterioridad. En 1994 se desmovilizó el Frente Francisco Garnica y en 1996 una columna del Frente Bernardo Franco.

También en 1994, el gobierno firmó un acuerdo con tres grupos de milicias de Medellín. A raíz de este acuerdo, las autoridades nacionales y locales se comprometieron a fortalecer la inversión social en las comunas populares de dicha ciudad y conformaron mesas de consensos con participación comunitaria. Los milicianos desmovilizados conformaron una cooperativa de vigilancia que dio continuidad legal a la seguridad colectiva Sin embargo, la cooperativa fracasó y fue cancelada al reproducir sus integrantes comportamientos arbitrarios frente a la población y al darse una serie de asesinatos entre sus miembros.

Posteriormente, en 1998, bajo el mandato del presidente Samper se produjo el acuerdo con los grupos milicianos del MIR COAR en la misma ciudad de Medellín, lo que constituyó otra experiencia de proceso de paz y convivencia urbana que consideró compromisos de estímulo a la participación política y comunitaria desde lo local.

A pesar de que el presidente Samper definió el proceso de paz como uno de los puntos principales a tratar durante la legislatura, las negociaciones con los alzados en armas no prosperaron por la crisis gubernamental surgida a partir de las acusaciones basadas en la presunta financiación de su campaña con dineros del narcotráfico. Hubo contactos informales con el ELN y se produjeron acuerdos puntuales en el campo de la aplicación del DIH así como un pre-acuerdo de negociación (Preacuerdo del Palacio de Viena) que no prosperó debido a un escape de información en la prensa española.

Andrés Pastrana tuvo reuniones con Manuel Marulanda, jefe máximo de las FARC antes de acceder al gobierno y al poco tiempo de posesionarse inició con dicha

organización un proceso de negociación que no llegó a buen puerto. Durante su gobierno, los grupos paramilitares encabezados por Carlos Castaño hicieron propuestas de negociación pero siempre sujetas a la acción de los guerrilleros.

2.3 EL PROCESO DE PAZ CON LAS AUTODEFENSAS

El primer gobierno del presidente Uribe, después del fracaso del proceso de negociación con las FARC durante la presidencia de Pastrana, modificó el esquema imperante durante los últimos años: suprimió la Dirección General para la Reinserción y el Programa de Reinserción para dar lugar al Programa de reincorporación a cargo de una Comisión Intersectorial con responsabilidades de los Ministerios de Defensa e Interior. También introdujo la reforma a la ley de orden público que posibilita los procesos de paz para suprimir el carácter político de las organizaciones armadas ilegales, de forma que se traten de manera similar los guerrilleros y los paramilitares.

En octubre de 2002 las autodefensas manifestaron por intermedio de la iglesia católica su disposición para declarar un cese de hostilidades con el propósito de iniciar un proceso de paz.; los primeros contactos con el gobierno nacional tuvieron lugar en noviembre y el 1 de diciembre de 2002 los paramilitares de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) declararon un cese unilateral de hostilidades. A partir de esa fecha, el gobierno designó una Comisión Exploratoria de Paz y en las primeras semanas de 2003 inició con esos grupos armados ilegales un denominado “proceso de paz”.

Cuando se iniciaron los diálogos con los grupos de autodefensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y la Comisión Exploratoria debieron atender cuatro mesas de diálogo paralelas. Una con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dos con el Bloque Central Bolívar (BCB) y la Alianza Oriente y una cuarta

con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) que se negaron a compartir mesa con las anteriores³⁵.

Las conversaciones se iniciaron en medio de incidentes al cabo de los cuales el Bloque Élmer Cárdenas se retiró de la mesa. Para impedir nuevas deserciones, los jefes de los diferentes grupos de autodefensas que participaban en los diálogos firmaron un Acta de Compromiso el 13 de febrero de 2003³⁶ que los obligaba a mantenerse en el proceso so pena de perder la comandancia de sus estructuras³⁷.

El 25 de junio de 2003, la Comisión Exploratoria hizo público un documento de recomendaciones en el que sugería continuar con el proceso de negociación con el objetivo central de desmovilizar y reincorporar a la vida civil a los integrantes de las autodefensas e insistía en congregar a los diferentes grupos en una sola mesa. Así mismo, solicitaba el acompañamiento de la comunidad internacional y continuar con las labores de facilitación de la iglesia católica³⁸.

En julio se firmó el Acuerdo de Santa Fe Ralito para contribuir a la paz de Colombia³⁹ en virtud del cual el Gobierno y las autodefensas se comprometieron a dar inicio a una etapa de negociación⁴⁰ y en enero de 2004 el Presidente de la República y el Secretario General de la OEA firmaron el convenio que permitió poner en marcha la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA)⁴¹ que empezó a ejercer sus funciones a partir de febrero del mismo año. Este hecho, junto con la puesta en marcha de una Mesa de Diálogo unificada ayudó a generar el proceso que llevó a la firma del Acuerdo de Fátima el 13 de mayo de 2004 mediante el cual se puso en marcha una Zona de Ubicación Temporal – ZUT- en Tierralta, Córdoba. Permanece ausente del proceso el

³⁵ Presidencia de la República. “Proceso de Paz con las Autodefensas”. Informe Ejecutivo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Presidencia de la República. Bogotá, junio de 2006, p 5.

³⁶ Ver anexo 1.

³⁷ Ver Presidencia de la República, “Proceso de Paz con las Autodefensas”. Informe Ejecutivo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, p 5.

³⁸ Ver Presidencia de la República, “Proceso de Paz con las Autodefensas”. Informe Ejecutivo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, p 5.

³⁹ Ver anexo 2.

⁴⁰ Ver Texto “Acuerdo de Santa fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia.

⁴¹ Ver anexo 3.

grupo de Autodefensas Campesinas de Casanare con el cual el Gobierno no ha podido llegar a un acuerdo definitivo para su desmovilización⁴².

Mediante el comunicado del 12 de agosto de 2004 y la declaración del 7 de octubre denominada Acto de fe por la Paz⁴³, las AUC reiteraron su voluntad de desmovilización lo que abrió paso a una serie de desmovilizaciones colectivas que se iniciaron el 25 de noviembre con la entrega de armas del Bloque Bananero, en Turbo, Antioquia⁴⁴.

Cuando se inició el proceso de negociación con los paramilitares se calculaba que se desmovilizarían unos 15 mil efectivos. En julio de 2006 se habrían desmovilizado cerca de 35 mil contando las redes de apoyo y colaboradores ocasionales. El Ministerio del Interior ha cuestionado las listas que las autodefensas entregaron a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que ésta aceptó, por lo que unos 12 mil efectivos dejarían de recibir el auxilio que el Gobierno ha previsto para los que se desmovilicen⁴⁵.

2.4 LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN LOS PROCESOS DE PAZ⁴⁶

La comunidad internacional siempre ha estado presente de una u otra forma en los intentos llevados a cabo en el país por llegar a una solución negociada del conflicto. Ante la gravedad de los hechos y la ausencia de una solución a corto plazo ha ido ocupando un lugar cada vez mayor en las propuestas de negociación.

⁴² Ver Presidencia de la República,. “Proceso de Paz con las Autodefensas”. Informe Ejecutivo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, p 7.

⁴³ Ver anexo 4.

⁴⁴ Ver Presidencia de la República,. “Proceso de Paz con las Autodefensas”. Informe Ejecutivo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, p 7.

⁴⁵ Torres Martínez, John. “12 mil “ex paras” dejarán de recibir auxilio del Gobierno. El Tiempo, sábado 8 de julio de 2006, p 1-6.

⁴⁶ Fundación Ideas para la paz. “Las propuestas y acciones más relevantes de la comunidad internacional en el conflicto armado en Colombia”. Boletín N.1 del Observatorio de la Comunidad Internacional. Disponible en <http://www.ideaspaz.org/proyecto05/boletines/boletin01.htm>

En el gobierno del presidente Betancur el M19 propuso la mediación del Grupo de Contadora para restablecer la tregua pero esta propuesta fue rechazada por el gobierno colombiano.

Durante la presidencia de Virgilio Barco, las FARC propusieron la intervención de los presidentes de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, como facilitadores para un diálogo de paz entre la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y el gobierno, pero ante el rompimiento de relaciones entre las partes, la propuesta no prosperó.

César Gaviria descartó la posibilidad de una mediación internacional en el conflicto armado pero la verificación internacional fue clave en los procesos de desmovilización y desarme que se llevaron a cabo durante su gobierno. El Partido Socialista Obrero español y la Internacional Socialista estuvieron presentes en el proceso con el EPL, representantes del Consejo Mundial de Pueblos Indios en el del Movimiento Quintín Lame y la Comisión de Veeduría con la CRS.

En los inicios de su gobierno, el presidente Samper, junto con su Ministro de Defensa y el Alto Comisionado para la Paz, se reunió con el representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Álvaro de Soto buscando la mediación pero ésta no se concretó. Posteriormente, anunció que solamente aceptaría la mediación internacional de la Cruz Roja para la liberación de soldados privados de su libertad por las FARC. Una comisión internacional con participación del CICR, el expresidente de Costa Rica y representantes del Parlamento Centroamericano facilitó y verificó la liberación de sesenta uniformados el 15 de julio de 1997. En noviembre del mismo año, el Grupo de Países Amigos, compuesto por España, México, Costa Rica y Venezuela, ratificó su voluntad de mediar en la solución negociada al conflicto. El presidente Samper aceptó el ofrecimiento pero aclarando que la participación internacional debía darse en términos de buenos oficios. Antes del ofrecimiento del Grupo de Países Amigos, los presidentes de Costa Rica y Guatemala habían ofrecido también su ayuda como facilitadores para que se llevaran a cabo los diálogos entre el gobierno colombiano y las guerrillas.

Durante la presidencia de Andrés Pastrana la presencia de la comunidad internacional fue muy activa en los intentos por encontrar una salida negociada al conflicto. En mayo de 1999, el Gobierno Nacional y las FARC firmaron el Acuerdo de Caquetania⁴⁷ tendiente a conformar una comisión internacional de acompañamiento y de verificación para superar “cualquier inconveniente” que se presentara.

El presidente anunció la existencia de esta comisión en septiembre del mismo año. En junio de 2000 se constituyó el Grupo de Países Amigos y Facilitadores del proceso de paz con el ELN – compuesto por Francia, España, Noruega Cuba y Suiza. En abril de 2001, por iniciativa conjunta del Gobierno Nacional y de las FARC, se creó la Comisión de Acompañamiento a la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación, conformada por diez países amigos y facilitadores, la iglesia católica y el Asesor Especial de la ONU.

Por su parte, el presidente Uribe, desde su discurso de posesión dio a conocer su solicitud de buenos oficios a Kofi Annan para buscar el diálogo útil a partir de un previo cese de hostilidades. El Secretario General de las Naciones Unidas manifestó su apoyo incondicional en calidad de buenos oficios a los esfuerzos del gobierno y la sociedad civil para lograr un acuerdo negociado. En junio de 2003, en comunicado público, la Comisión Exploratoria de Paz propuso solicitar veeduría y acompañamiento internacional con el fin de evidenciar la seriedad del proceso con las autodefensas y en enero de 2004 el convenio que permitió poner en marcha la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos.

Tal como lo evidencia la dinámica que ha acompañado los intentos de salida política al conflicto armado, es cada vez menos fácil prescindir de la presencia de la comunidad internacional en las negociaciones, ya sea en su calidad de veedora, facilitadora o mediadora.

⁴⁷ Ver anexo 5.

CAPÍTULO 3. ¿LEY DE JUSTICIA Y PAZ O PERPETUACIÓN DE LA IMPUNIDAD?

Las AUC declararon un cese al fuego unilateral en diciembre de 2002 con el fin de iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe. En enero de 2003 el Gobierno promulgó el decreto 128⁴⁸ para facilitar la desmovilización de estos grupos y la negociación se inició formalmente en la zona de concentración de Santa Fe Ralito (Córdoba) en julio de 2004.

En junio de 2005, después de dos años de debates enconados en el Congreso, fue votada la Ley 975⁴⁹ de Justicia y Paz con la que el Gobierno pretende dismantelar las organizaciones paramilitares. Apenas aprobada, se desataron críticas provenientes de diversos frentes que la consideraron demasiado permisiva.

En este capítulo se presentan en un primer apartado los puntos clave de la ley aprobada por el Congreso y las críticas que a la misma han hecho algunas organizaciones y actores políticos para, a continuación, hacer una referencia al carácter penal de la ley y la problemática relacionada con un posible proceso de paz con los paramilitares.

3.1 LO QUE APROBÓ EL CONGRESO

La iniciativa tendiente a contar con una herramienta legal para dismantelar las organizaciones paramilitares y disponer de parámetros para la reparación de las víctimas de estas organizaciones fue presentada por primera vez en octubre de 2003. Conocida en ese momento como de “alternatividad penal”, representaba una apuesta del presidente Uribe de buscar una salida jurídica para los autores de delitos atroces que no podían ser beneficiados por la ley 782 de 2002, concebida sólo para responsables de los delitos de rebelión, sedición y asonada.

⁴⁸ Ver anexo 6

⁴⁹ Ver anexo 7.

Consciente de que las autodefensas no tolerarían las penas del Código Penal el presidente se comprometió a buscar castigos alternativos al tiempo que emprendía las negociaciones de paz. Como era de esperarse, desde un comienzo, la idea despertó la suspicacia de la comunidad internacional y de los críticos de su gobierno. Fue así como a principios de 2005 el Gobierno presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley llamado “de justicia y paz”, el cual reconoce en su exposición de motivos que *“la política de seguridad democrática adelantada por el Gobierno Nacional no tiene propósito distinto que alcanzar la paz combinando con precisión el uso de la fuerza y la vía dialogada”*⁵⁰.

La ley busca facilitar procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley mediante la suspensión de la ejecución de la pena principal y la aplicación de una pena alternativa que se concede por la contribución a la consecución de la paz y la reparación de las víctimas.

Las penas previstas en la ley, antes del fallo de la Corte Constitucional que modificó algunos puntos de la misma, oscilaban entre 5 y 8 años de cárcel pagaderos en lugares que podía determinar el Inpec, inclusive granjas agrícolas. De la misma manera, el tiempo transcurrido en el lugar de las negociaciones podía ser descontado de la pena.

Los hechos delictivos cubiertos por la ley son aquellos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal. Inicialmente, la norma otorgaba status político a los paramilitares al establecer que quien conforme o haga parte de grupos de autodefensa incurre en el delito de sedición, considerado como delito político por la Constitución.

En cuanto a las víctimas, son aquellas personas que individual o colectivamente han sufrido daños directos tales como lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales.

Por desmovilización la ley entiende el acto individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley (GAOML),

⁵⁰ Ver anexo 8.

realizado ante autoridad competente. Los desmovilizados rendirían una versión libre y espontánea; la Fiscalía verificaría los hechos dentro de los 60 días siguientes a la audiencia. En caso de descubrirse nuevos delitos después de la audiencia se aplicaría la misma pena alternativa si el autor acepta haber participado en su realización.

La ley contemplaba una rebaja de la pena de diez por ciento para quienes cumplieran condenas ejecutoriadas, con excepción de los delitos contra la libertad y la integridad, los de lesa humanidad y el narcotráfico. Por último, los miembros de los GAOML que se beneficien de la ley tienen el deber de reparar a las víctimas de las conductas por las que sean condenados. Cuando no se encuentre victimario, la reparación corre por cuenta del Fondo de Reparación.

3.2 REACCIONES A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

Apenas se conoció la aprobación de la Ley de Justicia y Paz por el Congreso, la comunidad internacional reaccionó negativamente. Nos detendremos en este apartado en algunas críticas formuladas por instancias internacionales y actores de la vida nacional.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas conceptuó que la ley ofrecía beneficios judiciales demasiado generosos y podía abrir la puerta a la impunidad por cuanto:

- a) “No estimula en forma clara el logro de acuerdos colectivos entre el Gobierno y los grupos armados al margen de la ley para que estos últimos cesen las hostilidades, dejen las armas, abandonen el conflicto armado y desmonten efectivamente sus estructuras ilegales”.
- b) “La ausencia en la ley de referencias al conflicto armado interno y al derecho internacional humanitario hace que no existan fronteras claras respecto al tipo de delitos que podrían ser cobijados por la llamada pena alternativa. Esta falta de contexto y claridad normativa puede llegar a incluir delitos comunes y de narcotráfico”.

- c) “El considerar el paramilitarismo como delito político permite cobijar con la impunidad a las personas, incluyendo eventualmente a servidores públicos, que hayan participado o asistido en la conformación de grupos paramilitares o en sus actividades ilegales. Según la Constitución, los delitos políticos pueden ser objeto de amnistías e indultos y, por tanto, no ser sancionados”.
- d) “La ley aprobada no incluye condiciones y mecanismos lo suficientemente efectivos para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de la verdad. Sin el conocimiento pleno de la verdad y el esclarecimiento de los hechos no puede hacerse efectiva la justicia, ni asegurarse la reparación a las víctimas”.
- e) “La ley aprobada no ofrece suficientes mecanismos para superar los obstáculos para una efectiva reparación a las víctimas... Básicamente, la ley hace depender la reparación, por parte de los victimarios, de los bienes y recursos que éstos quieran declarar y entregar. Pone la carga para obtener reparaciones sobre las víctimas, sin darles el apoyo adecuado del Estado en el proceso judicial. Además, aborda insuficientemente la responsabilidad estatal de reparar en los casos que directamente le corresponde”.
- f) “La ley no incluye inhabilidades políticas temporales, ni inhabilidades para formar parte de la Fuerza Pública o de otros cuerpos armados oficiales, para los desmovilizados de los grupos ilegales que hayan cometido crímenes”⁵¹.

La Comisión Internacional de Juristas, en cuanto a ella, afirmó que “...esta ley es un nuevo golpe para las víctimas de los paramilitares. Consolida la impunidad y excluye el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”⁵². Consideró, además, que “De acuerdo con el derecho internacional, el Estado colombiano tiene la

⁵¹ Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Consideraciones sobre la Ley de “Justicia y Paz”. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bogotá, junio de 2005, disponible en <http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2005/cp0535.pdf>, p 2.

⁵² Comisión Internacional de Juristas. “Comunicado de prensa”. Ginebra, junio de 2005, disponible en <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/limpu2.html>.

obligación de perseguir, juzgar y castigar a los autores de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra con penas apropiadas a la gravedad de los hechos. La impunidad de estos crímenes es intolerable y si Colombia ha fallado en garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, le corresponde a la Corte Penal Internacional y a su Fiscal tomar cartas en el asunto”⁵³.

Con anterioridad a la aprobación del proyecto de ley, Human Rights Watch se había manifestado en un sentido desfavorable. José Miguel Vivanco declaró en Washington que “El proyecto actual hace poco más que servir los intereses de los líderes paramilitares; no toca sus redes mafiosas ni el poder económico que alimenta las actividades de sus grupos... Es un mal arreglo tanto para los colombianos como para la comunidad internacional y sienta un precedente desastroso para negociaciones futuras con otros grupos armados”⁵⁴.

En Colombia, la discusión del proyecto despertó polémicas intensas. El Partido Liberal votó contra el proyecto y en las filas uribistas se levantaron las voces del senador Rafael Pardo y de la representante Gina Parody quienes consideraron que la ley, tal como estaba concebida, no serviría para promover una verdadera paz en el país porque dejaba de lado el principio fundamental de la verdad como tampoco reparaba los efectos negativos de las actividades armadas de los paramilitares.

El Gobierno, como es lógico, argumentó que había que encontrar un balance entre los requerimientos de la justicia y los de la paz, lo que implica la aceptación de cierta impunidad implícita en todo proceso de negociación. También hizo énfasis en el hecho de que era la primera ley y el primer proceso de desmovilización que ofrecía penas a combatientes y dirigentes que no habían sido vencidos en combate, en contraste con los procesos de desmovilización previos con las guerrillas.

En un plano académico, estudiosos como Julio González Zapata reconocieron que si bien la ley presentaba “algunas dificultades básicas”, la discusión que se

⁵³ Comisión Internacional de Juristas. “Comunicado de prensa” .

⁵⁴ Human Rights Watch, Colombia- “Proyecto deja intactas las estructuras paramilitares”. Washington, junio de 2005, disponible en http://www.hrw.org/spanish/press/2005/colombia_paras_ley.html.

desarrollaba en el país estaba nutrida de “prejuicios e ilusiones que enrarecen el debate, alimentan viejos mitos y trastocan, o peor aún, afirman plenamente algunas imágenes en una opinión pública sedienta de fórmulas mágicas y soluciones rápidas”⁵⁵. Criticó también el autor la intromisión de la “llamada comunidad internacional” por cuanto “contribuye al cercenamiento del concepto de soberanía pero difícilmente constituye una prenda de garantía para obtener aquellos valores” (los de verdad, justicia, reparación y paz)⁵⁶.

Basándose en la tesis de Michel Foucault para quien “La ley nace de conflictos reales, masacres, conquistas, victorias que tienen sus fechas y sus horroríficos héroes, la ley nace con los inocentes que agonizan al amanecer”⁵⁷, González Zapata considera que desde la creación de la ley penal ya hay una decisión de quiénes serán sus destinatarios y quiénes no. En otros términos, “El carácter discriminatorio del sistema penal se hace visible cuando indica quiénes deben ingresar a él, quiénes deben permanecer y a quiénes se les dará un trato privilegiado o agravado.... El derecho penal ha sido tal vez el más poderoso o, cuando menos, el más drástico sistema de control social que han inventado las sociedades modernas”⁵⁸.

Por lo tanto pretender que la ley sea garante de la verdad es una utopía, al margen de “qué verdad estamos dispuestos a recibir y, sobre todo, qué posibilidades tenemos de alcanzarla mediante un procedimiento judicial”⁵⁹. En pocas palabras, “Nunca será posible pedirle a una norma penal que sea un instrumento de paz”⁶⁰.

En cuanto a la intromisión de la comunidad internacional, el autor considera que su presencia impide al país enfrentarse con autonomía e imaginación a sus

⁵⁵ González Zapata, Julio. “Verdad, justicia, paz y reparación en la mitología penal. A propósito de la ley 975 de 2005”. En Estudios Políticos No. 27. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, Medellín, julio-diciembre de 2005, p 46.

⁵⁶ Ver González Zapata, Julio. “Verdad, justicia, paz y reparación en la mitología penal. A propósito de la ley 975 de 2005”, p 47.

⁵⁷ Foucault, Michael. *Genealogía del racismo. De la guerra de las razas al racismo de Estado*. La Piqueta. Madrid, 1992, p 59.

⁵⁸ Ver González Zapata, Julio. “Verdad, justicia, paz y reparación en la mitología penal. A propósito de la ley 975 de 2005”, p 48.

⁵⁹ Ver González Zapata, Julio. “Verdad, justicia, paz y reparación en la mitología penal. A propósito de la ley 975 de 2005”, p 48.

⁶⁰ Ver González Zapata, Julio. “Verdad, justicia, paz y reparación en la mitología penal. A propósito de la ley 975 de 2005”, p 59.

problemas y buscarles una solución a la medida de sus posibilidades, realidades y expectativas. “En este punto resulta altamente simbólico que el presidente tenga que viajar a España e Inglaterra y se haya enviado una comisión del más alto nivel a Estados Unidos a explicar la ley antes de sancionarla. No es posible resistirse a la tentación de llamar estos viajes como de tramitación de permisos... “⁶¹.

Los argumentos del Gobierno y las razones expuestas por González Zapata no dejan de tener razón. En efecto, la norma sola no es garantía de nada. Pero tampoco puede olvidarse que en toda sociedad la acción está normada y que toda norma debe descansar en unos mínimos éticos so pena de no ser aceptada, con los consiguientes problemas de gobernabilidad que ello representa. Discutible o no, el hecho es que en la actualidad la democracia y los derechos humanos constituyen los referentes que legitiman o deslegitiman las decisiones políticas, valga decir, el ejercicio del poder. De allí que la Corte Constitucional haya hecho reparos profundos a la ley tal como fue aprobada por el Congreso.

En términos generales, la Corte Constitucional reafirmó el tratamiento judicial a quienes hagan la paz con el Gobierno pero enderezó aspectos críticos de la ley que aprobó el Congreso por considerarlos inconstitucionales.

En su comunicado de prensa del 19 de mayo de 2006⁶², la Corte hizo tres modificaciones fundamentales a la Ley de Justicia y Paz. En primer lugar, determinó que la verdad completa es la llave para conseguir beneficios pues la confesión veraz es lo que permite tener acceso a la pena alternativa. En este sentido, la omisión de confesión plena llevaría a la pérdida de beneficios. En segundo lugar, las víctimas o sus representantes tendrán acceso al proceso judicial, podrán pedir pruebas y llamar testigos. Por último, quitó el beneficio de descontar de la condena efectiva el tiempo de residencia en los campamentos, lo que significa que la pena alternativa queda entre cinco y ocho años efectivos.

La Corte también declaró inconstitucional, por vicios de trámite, el discutido status político con que se permitió cubrir los crímenes de los paramilitares, pero esta

⁶¹ Ver González Zapata, Julio. “Verdad, justicia, paz y reparación en la mitología penal. A propósito de la ley 975 de 2005”, p 62.

⁶² Ver anexo 9.

decisión no genera ningún traumatismo por cuanto a los desmovilizados se le ha cesado el procedimiento por asociación para delinquir y porte de armas con base en la Ley 782 de 2002⁶³, que no se cuestiona.

Un aspecto controvertido de la decisión de la Corte es el de acumular la pena alternativa con condenas anteriores puesto que declaró que la pena alternativa era la regla de acumulación. En otros términos, si hay pleno reconocimiento de los hechos, es la pena alternativa la que determina el tiempo de privación de libertad. De este modo, la pena alternativa también aplica a los ya condenados.

⁶³ Ver anexo 10.

CAPÍTULO 4. DIFICULTADES Y POSIBILIDADES DE UN PROCESO DE PAZ EXITOSO CON LAS AUC

Indudablemente, el ingrediente novedoso de la política de paz del gobierno del presidente Uribe es la negociación con las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, en la medida en que rompe con la posición de los gobiernos anteriores, desde que el presidente Barco declaró ilegales a los grupos paramilitares, lo que ha generado el temor acerca de la impunidad que tal acuerdo implica por las condiciones en que se ha desarrollado.

La negociación con las autodefensas rompió el marco de análisis de la política de paz por cuanto siempre se pensó que la desmovilización de los paramilitares sería el resultado de la política de paz con la insurgencia, posterior o simultáneo, dado que ellos mismos afirmaban ser consecuencia de la presencia guerrillera. De allí los numerosos interrogantes que ha suscitado la posibilidad de desmovilizar las fuerzas paramilitares como resultado de una negociación con el Gobierno. En realidad, son numerosos los sectores de opinión nacional e internacional que cuestionan o apoyan con reservas dicho proceso de negociación por diversas razones.

A continuación se destacarán los aspectos relevantes de la negociación que adelanta el Gobierno nacional con los paramilitares y se analizarán los factores que asegurarían la viabilidad de un proceso exitoso para establecer un balance entre lo logrado y lo que quedaría pendiente para concretar una verdadera política de paz.

4.1 LA HISTORIA Y LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PARAMILITARES

El primer aspecto que se debe tener en cuenta para establecer el alcance de la política de paz con las autodefensas es que el fenómeno del paramilitarismo no es nuevo en Colombia ni siempre fue ilegal. El paramilitarismo forma parte de la tradición de las élites nacionales que han recurrido a él para acallar a sus opositores mediante el uso de la fuerza como ocurrió con los pájaros de los años de la Violencia. También

encuentra fundamento doctrinario en la Guerra Fría y cuenta con importantes apoyos en las estructuras de poder. Tal como lo afirmó Salvatore Mancuso, jefe del estado mayor de las AUC, en el discurso de establecimiento de las conversaciones:

*“Ha sido un largo camino recorrido por las autodefensas desde San Juan Bosco Laverde, San Vicente de Chucurí y Puerto Boyacá en 1982, hasta Santa Fe de Ralito hoy, primero de julio de 2004(...) aún para finales del decenio de los años ochenta, permanecía vigente el amparo jurídico de la Ley 48 de 1968 que le otorgaba sustento legal a la organización en armas”*⁶⁴.

En realidad, el gobierno colombiano expidió a mediados de los años 60 una serie de actos legislativos como respuesta a la aparición de los primeros grupos guerrilleros en el país, mediante los cuales impulsó la creación de grupos de civiles armados dispuestos a colaborar con las fuerzas del ejército y la policía que adelantaban tareas antisubversivas. En otros términos, el paramilitarismo de los años 60 se inició con base en normas jurídicas y como una estrategia contrainsurgente del Estado. Pero una vez derogadas las leyes que le brindaron sustento jurídico, se convirtió en delito.

La situación jurídica de las autodefensas los sitúa en la mira de la comunidad internacional por cuanto están incurso en delitos tipificados como de lesa humanidad y el tráfico de sustancias ilícitas, delito que los Estados Unidos están interesados en juzgar y condenar. En efecto, no puede perderse de vista que una fracción importante de las fuerzas paramilitares que hoy negocian con el Gobierno proviene de ejércitos privados al servicio del narcotráfico. De allí que muchos analistas piensen que lo que las AUC buscan es un amplio margen de impunidad para sus delitos y evitar la acción de la justicia en su contra.

⁶⁴ Torres Cárdenas, César. “La administración de justicia y la construcción de la paz en Colombia (Reflexiones acerca del papel de la justicia en el diálogo Estado-paramilitares)”. Noviembre 2004, p 3, disponible en http://www.focal.ca/pdf/colombia04_2.pdf.

Del mismo modo hay que recordar que, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos incluyeron a las AUC, junto con las FARC y el ELN, en la lista de las organizaciones terroristas.

Los aspectos mencionados plantean una serie de interrogantes relacionados con el desmonte del paramilitarismo como fenómeno estructural más allá de la desmovilización de las AUC, tales como el negocio del narcotráfico en las zonas donde las autodefensas han impuesto sus propias reglas, el control del territorio hoy en manos de fuerzas paramilitares y el papel de los Estados Unidos en las negociaciones con este grupo. En efecto, ¿hasta qué punto tolerarán los Estados Unidos que ciertos narcotraficantes pedidos en extradición logren limpiar su pasado haciéndose pasar por autodefensas?

En razón de la difícil circunstancia jurídica que los rodea, los paramilitares han expresado de diversas maneras que no están dispuestos a pagar penas de prisión y, por el contrario, se han presentado como servidores del interés nacional. Fue así como Salvatore Mancuso sostuvo ante el Congreso de la República⁶⁵ que:

*“Como recompensa a nuestro sacrificio por la patria, haber liberado de las guerrillas a media República y evitar que se consolidara en el suelo patrio otra Cuba o la Nicaragua de otrora, no podemos recibir la cárcel”*⁶⁶.

4.2 LA DEBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ANTE LOS DELITOS DE LOS PARAMILITARES

Si los paramilitares buscan un amplio margen de impunidad para sus delitos es porque son conocedores de la fragilidad del aparato judicial colombiano. Dicha fragilidad se debe a factores institucionales y financieros originados en la corrupción y la falta de credibilidad. En un país donde el Estado no tiene el control sobre todo el territorio, los grupos al margen de la ley han impuesto sus propias reglas,

⁶⁵ Ver anexo 11.

⁶⁶ Ver Torres Cárdenas, César. “La administración de justicia y la construcción de la paz en Colombia (Reflexiones acerca del papel de la justicia en el diálogo Estado-paramilitares)”, p 4.

legislaciones y tribunales en las zonas donde ejercen su dominio lo que es un motivo grande de preocupación ante la falta de solidez de las instituciones judiciales colombianas.

Colombia ha sido calificada como un país de pluralismo jurídico en el que distintos órdenes normativos y mecanismos de trámites se superponen, conviven y chocan⁶⁷. A este factor estructural se suma el que la administración de justicia en el país es lenta y los despachos judiciales están desbordados de expedientes. El resultado es una relativa inoperatividad del sistema de justicia. En el caso de la situación de los grupos al margen de la ley, su solución depende de las normas que se expidan desde el legislativo y de la voluntad política del ejecutivo así como de sus intereses en la negociación⁶⁸.

Otros motivos de preocupación originados en la falta de solidez de las instituciones judiciales son el alcance limitado de la justicia transicional en razón de la prevalencia de altos niveles de impunidad que exceden el 95 por ciento y la limitada capacidad de la Fiscalía General de la Nación para investigar y procesar violaciones de los derechos humanos. Estas deficiencias impedirían no solamente el procesamiento de actores armados acusados de delitos contra los derechos humanos, sino que constituirían un obstáculo muy grande para una reconciliación duradera.

Además, en razón de sus carencias, es imposible que en las condiciones actuales la rama judicial pueda definir la situación jurídica de los más de 36.000 paramilitares que, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, han dejado sus armas. Por consiguiente, y de acuerdo con César Torres Cárdenas, *“sería necesario realizar esfuerzos en tres direcciones diferentes pero de manera simultánea: aprobación y puesta en marcha de una estrategia de reconstrucción de la verdad; creación de tribunales especiales para que conozcan y juzguen los delitos cometidos por las personas vinculadas a las AUC; y construcción de mecanismos y*

⁶⁷ e Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. “El caleidoscopio de las justicias en Colombia”. Colciencias, Ed UnianXdes. Universidad de Coimbra, Universidad Nacional. Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2001.

⁶⁸ Ver Torres Cárdenas, César. “La administración de justicia y la construcción de la paz en Colombia (Reflexiones acerca del papel de la justicia en el diálogo Estado-paramilitares)”, p 5.

*herramientas mediante las cuales tanto los individuos como las comunidades puedan perdonar los crímenes y faciliten la reinserción y la reconstrucción de relaciones sociales*⁶⁹.

En otras palabras, la justicia y la reconciliación duradera serían imposibles de alcanzar sin una reforma significativa y eficaz de las instituciones judiciales y la construcción de confianza en ellas. Así mismo, la reconciliación es un imposible si no se repara el daño hecho a las víctimas. Las reparaciones colectivas son tanto más importantes en los procesos de paz cuanto que el reconocimiento público del daño causado fortalece la confianza de la sociedad en las instituciones y fomenta un sentimiento de solidaridad y apoyo ciudadano al proceso.

En el proceso de clarificación, reconciliación y perdón también es indispensable la participación de la sociedad civil y de la comunidad internacional pero hasta lo que va corrido del proceso su presencia es tímida. En las negociaciones que se han llevado a cabo y en la que cada una de las partes ha cedido algo a cambio de las concesiones de la otra, la sociedad civil no se ha manifestado. En la mesa de diálogo han brillado por su ausencia las organizaciones que se han ocupado de hacer un seguimiento minucioso al conflicto armado así como las víctimas, sus familiares y las organizaciones en que se han agrupado. Por ello la desmovilización de miles de combatientes no ha aportado todavía de manera significativa a la superación del conflicto.

En cuanto a la participación de la comunidad internacional, su contribución en la mesa de negociaciones debe estar orientada a otorgar legitimidad al diálogo sirviendo de testigo y haciendo verificación de lo acordado, pero hasta el momento gran parte de la comunidad internacional ha estado al margen de las negociaciones con las autodefensas.

Aunque el gobierno nacional firmó con la OEA un convenio el 4 de febrero de 2004 para que esta organización participe en la asistencia a la desmovilización de los grupos paramilitares, la diplomacia europea se ha resistido a dar su aval a la Ley de

⁶⁹ Ver Torres Cárdenas, César. “La administración de justicia y la construcción de la paz en Colombia (Reflexiones acerca del papel de la justicia en el diálogo Estado-paramilitares)”, p 5.

Justicia y Paz e insiste en que el marco jurídico en el que se desenvuelva el proceso “ha de ser conforme a los compromisos internacionales y tomar en consideración el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”⁷⁰. En cuanto al convenio con la OEA, el Consejo de Ministros de la Unión Europea considera que la labor de esta organización se ha centrado más en un papel asistencial que en el objetivo por el cual se estableció, es decir, la verificación de los compromisos adquiridos por las partes⁷¹.

4.3 LA POSIBILIDAD DE UN PROCESO DE PAZ CON LAS AUTODEFENSAS

Todo proceso de paz en el mundo ha tenido que enfrentar el dilema entre justicia y verdad, por un lado, y perdón y olvido, por otro, y ha debido encontrar su propio modelo para resolverlo. Colombia, ante el número de actores armados implicados en el conflicto armado y la fragmentación interna de esos grupos ha optado por un modelo “parcelado” y desarrollar un proceso por fases. En cada uno de los acuerdos de paz con los movimientos guerrilleros, anteriores al proceso que se adelanta con las autodefensas, los esfuerzos se han concentrado en la incorporación política de los grupos con escasa consideración por su integración social, lo que no ha permitido encontrar una solución definitiva al conflicto.

Tal como se planteó, el éxito de la culminación de un conflicto armado y la sostenibilidad de la paz dependen de la identificación de la sociedad con la nueva situación y de su capacidad de participación en los procesos de verdad, justicia y reconciliación. En consecuencia, para fortalecer el proceso de paz con las AUC y llevarlo más allá de una simple negociación con elementos al margen de la ley, es conveniente fortalecer el papel de la sociedad civil en el proceso. De acuerdo con César Torres Cárdenas, una participación más activa de la sociedad civil permitiría,

⁷⁰ Montaña, Tatiana. “La diplomacia europea frente a la Ley de Justicia y Paz”. Bogotá, octubre de 2005, disponible en <http://www.voltairenet.org/article129627.html>

⁷¹ Ver Montaña, Tatiana. “La diplomacia europea frente a la Ley de Justicia y Paz”.

por lo menos, obtener más información acerca de los delitos que se han tratado en la mesa de negociaciones lo que brindaría más elementos de juicio a las autoridades judiciales; ayudaría también a crear condiciones favorables para la reconciliación entre víctimas, agresores y Estado; permitiría diseñar propuestas novedosas de política pública y encontrar una ruta para el proceso de reinserción de los actores armados a la población civil⁷².

En cuanto a una mayor presencia de actores internacionales en el proceso, el otorgarles un papel más protagónico en el mismo permitiría fortalecer el aparato de administración de justicia y progresar en la reconstrucción de la verdad, así como consolidar experiencias comunitarias patrocinadas por países amigos y contar con una ayuda para regular pacíficamente la vida en sociedad.

Una mayor participación de la sociedad civil y de la comunidad internacional para que el proceso de paz con las autodefensas no fracase es tanto más importante cuanto que es poco probable que en Colombia se invoque a la Corte Penal Internacional como instrumento clave para el procesamiento de las violaciones a los derechos humanos. El hecho de que la jurisdicción de la corte no sea aplicable retroactivamente y no pueda juzgar crímenes perpetrados antes del 1 de julio de 2002, limita su eficacia en el caso del conflicto colombiano que ya dura varias décadas.

De otro lado, la firme oposición a la CPI por parte de los Estados Unidos, el aliado más importante de Colombia y su principal fuente de ayuda económica y militar también reduce la probabilidad de que se recurra a la corte. Así mismo, aunque el gobierno norteamericano está empeñado en una lucha antiterrorista y contra el narcotráfico, la política de los Estados Unidos no es homogénea y el proceso de toma de decisiones en materia de política exterior en el que participan muchas agencias distintas e intereses encontrados resulta complejo.

Aunque la DEA, por ejemplo, parece interesada en que se extraditen los narcotraficantes a cualquier precio para mostrar resultados en la guerra contra las drogas y el Departamento de Estado empeñado en que se trate a todos los terroristas

⁷² Ver Torres Cárdenas, César. “La administración de justicia y la construcción de la paz en Colombia (Reflexiones acerca del papel de la justicia en el diálogo Estado-paramilitares)”, p 7.

por igual, al presidente de los Estados Unidos no le conviene que se debilite y pierda legitimidad el gobierno de su principal aliado latinoamericano si fracasa el proceso de negociación con las autodefensas.

En síntesis, la propuesta que se desprende de lo expuesto se condensa en un modelo de negociación fundamentado en los siguientes aspectos:

- a) Los acuerdos a los que lleguen los negociadores de una salida política al conflicto armado no pueden perder de vista la supremacía de los derechos humanos en la fundamentación de la convivencia pacífica y en la búsqueda de una paz positiva concebida como un proceso que se construye en la medida en que se transforman las estructuras sociales generadoras de conflictos.
- b) De acuerdo con los preceptos dominantes, el concepto de justicia que ha de primar es el de justicia transicional que, sin perder de vista el castigo de los culpables, propone la reparación al daño causado a las víctimas. En consecuencia, la salida del indulto y la amnistía al igual que las leyes de perdón y olvido quedan proscritos si lo que se busca es la reconciliación y la reconstrucción como metas del proceso de paz.
- c) La reconciliación no es posible mientras no se respeten los derechos de las víctimas y este aspecto incluye el que se conozca la verdad de los hechos. De allí que una pieza importante del proceso sea la constitución de comisiones de la verdad que, sin arrogarse funciones judiciales, contribuyan al esclarecimiento de los hechos y permitan establecer responsabilidades tanto individuales como colectivas e institucionales.
- d) La complejidad del conflicto armado que conoce el país desde hace décadas impone una solución que requiere el rechazo de fórmulas extremas y radicales, por lo tanto, altas dosis de pragmatismo. Sin embargo, quienes deben decidir el grado de pragmatismo tolerable en aras de un proceso de reconstrucción de los lazos rotos deben ser los afectados por el conflicto, con la presencia de actores dispuestos a apoyar el proceso de negociación y reconstrucción conducente a la reconciliación y la solución de los conflictos

subyacentes. En otras palabras, el proceso de negociación debe contar con la presencia de la sociedad civil y de la comunidad internacional, llamadas a facilitar, supervisar y legitimar los cambios previstos.

De acuerdo con lo expuesto inicialmente, en el mundo global se imponen poco a poco ciertos regímenes que legitiman las relaciones y las prácticas que se establecen en función de la forma como los actores preponderantes del sistema internacional ejercen el poder. El conflicto colombiano involucra una serie de prácticas que son objeto de rechazo por parte de la comunidad internacional; en efecto, los delitos de lesa humanidad no son amniables ni indultables y el narcotráfico es un delito internacional que todo Estado está en la obligación de combatir, así como el terrorismo.

Sin embargo, los Estados no son actores unitarios y en su seno se desarrollan procesos complejos determinados por intereses no siempre coincidentes que favorecen en el plano internacional el mismo pragmatismo que caracteriza la búsqueda de salidas negociadas a los conflictos internos. De allí que no pueda darse una respuesta perentoria al dilema que plantea el derecho de justicia a las víctimas o el derecho de las víctimas a vivir en paz. La solución se da en la medida que cuando en el curso de un proceso difícil y traumático, ciertamente, se sientan las bases de un proyecto que une lo que estaba fragmentado.

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

El proceso de negociación con las autodefensas no ha sido ni será fácil. Tampoco dará lugar al cierre definitivo de la confrontación armada en Colombia. Pero como lo ha anotado Antonio Sanguino, Presidente de la Corporación Nuevo Arco Iris, dado el modelo de “paz parcelada” que se ha impuesto en Colombia, “si no se coloca en una perspectiva de “paz incremental”, puede ocasionar un nuevo ciclo de violencia” en el país.⁷³

Para que el proceso de paz con los paramilitares sea una contribución real al proyecto de reconciliación nacional han de cumplirse tres condiciones básicas, a saber: un marco jurídico claro, seguridad en las zonas de desmovilización y reinserción efectiva de los combatientes, condiciones todas al servicio de la vigencia de los derechos humanos.

En el marco de la misión asumida por el gobierno nacional, la prioridad debe ser dada a la lucha contra la impunidad concebida como un problema político y social. Por su definición misma – ausencia de pena- la impunidad pareciera circunscribirse al terreno jurídico pero como fenómeno social desborda este ámbito y adquiere una connotación política. Cuando la impunidad se instala en todos los espacios sociales, destruye el tejido social y consagra la ley del silencio como norma suprema de convivencia lo que tiene consecuencias directas sobre la sociedad y la cultura política en la medida en que se configura una especie de democracia bajo hipoteca, rehén de los verdugos del pasado y del presente.

La impunidad de los crímenes de lesa humanidad conlleva la trivialización de la violencia y la injusticia, a la vez que cierra los espacios a la solución democrática de los conflictos al sugerir que existen personas que están por encima de la ley. Por ello un presupuesto de la justicia es encontrar la verdad, requisito fundamental para asignar responsabilidades.

⁷³ Sanguino P., Antonio. “Desmovilización de las AUC: rectificación o catástrofe”. Disponible en <http://www.vivalaciudadania.org/cajavirtual/svc0018/articulo01.pdf>.

Ciertamente, en conflictos tan profundos y de tan larga duración como el que padece Colombia, intentar ejercer justicia plena es una utopía pero de allí a proponer mecanismos de alternatividad penal como los que se ha intentado implementar en el país es legalizar la impunidad de manera absoluta lo cual no contribuye de manera alguna a la reconciliación.

Es un hecho que dadas las concesiones que inevitablemente han de hacerse para lograr la paz, no siempre se pueden implementar plenamente los principios y las normas establecidas por las instituciones internacionales para el procesamiento de las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, dichos principios constituyen una guía para el proceso de justicia transicional. Además, cabe recordar que, según las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario las amnistías de crímenes contra la humanidad no tienen validez alguna y son nulas.

En una democracia, otro requisito de todo proceso de reconciliación es el fortalecimiento de la institucionalidad y el monopolio de la fuerza legítima en manos del Estado, garantía de seguridad ciudadana. Sin una reforma significativa y eficaz del sistema judicial y mientras no se establezca el imperio de la ley no será posible que la sociedad confíe en los poderes públicos.

Así mismo, la reincorporación a la vida civil de los combatientes es una quimera si no se da una inserción real de los mismos a la vida civil lo cual supone la puesta en marcha de políticas activas y acciones precisas dirigidas a las comunidades receptoras de los desmovilizados y a devolver a las víctimas lo perdido.

La reconciliación, por lo tanto, la coexistencia entre antiguos adversarios no es posible si se olvidan los derechos de los desplazados y no se procede a una reparación que vaya más allá de lo puramente simbólico. Aunque históricamente se ha comprobado que jamás se puede indemnizar totalmente las pérdidas de las víctimas o borrar el dolor de las experiencias sufridas, la ausencia de resarcimiento para las víctimas resta legitimidad tanto al procesamiento legal como a las comisiones de la verdad y restringe su capacidad de contribuir a la reconciliación.

También es importante considerar que, tanto en el mejoramiento de las condiciones actuales como en la dirección de las negociaciones, los actores de la sociedad civil y de la comunidad internacional pueden asumir papeles protagónicos proclives a una mayor transparencia basada en un monitoreo permanente al sector judicial y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes.

Por último, y aunque no fue el propósito de este trabajo, no se puede pasar por alto, por un lado, que el narcotráfico es un actor más, y muy importante, del conflicto, y por otro, que Colombia requiere cambios muy profundos. En realidad, las dificultades mayores para una paz sostenible no residen en la firma de un acuerdo sino en las tareas propias del posconflicto cuando viene la difícil tarea de construir un país en el que quepan todos los colombianos de forma que puedan aspirar a una vida digna.

En síntesis, de acuerdo con lo expuesto inicialmente, en el mundo global se imponen poco a poco ciertos regímenes que legitiman las relaciones y las prácticas que se establecen en función de la forma como los actores preponderantes del sistema internacional ejercen el poder.

En cuanto al conflicto colombiano, involucra una serie de prácticas que son objeto de rechazo por parte de la comunidad internacional; en efecto, los delitos de lesa humanidad no son amnistiabiles ni indultables y el narcotráfico es un delito internacional que todo Estado está en la obligación de combatir, así como el terrorismo. Sin embargo, los Estados no son actores unitarios y en su seno se desarrollan procesos complejos determinados por intereses no siempre coincidentes que favorecen en el plano internacional el mismo pragmatismo que caracteriza la búsqueda de salidas negociadas a los conflictos internos, lo cual deja un margen de maniobra a los gobiernos, acotado, sin embargo, por las normas internacionales.

De allí que no pueda darse una respuesta perentoria al dilema que plantea el derecho de justicia a las víctimas o el derecho de las víctimas a vivir en paz. La solución se va dando cuando en el curso de un proceso, ciertamente difícil y traumático, se sientan las bases de un proyecto que une lo que estaba fragmentado,

permite avanzar en la construcción de una vida digna para todos, se sientan las bases de la reconciliación y se abren las puertas al perdón.

BILIOGRAFÍA

Libros

Comisión de superación de la violencia. *Pacificar la paz. Lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz*. Comisión de superación de la violencia. Santa fe de Bogotá, 1992.

Fisas Vincenç. *Cultura de paz y gestión de conflictos*. Barcelona. Icaria, Ediciones UNESCO. Barcelona, 1998.

Johan Galtung. *“Tras la Violencia, 3R: Reconstrucción, Reconciliación, Resolución”*. Bakeaz –Gernika Gogoratuz, Bilbao, 1998

Hayner Priscila. *Unspeakable Truths: Facing the challenge of truth commissions*. New Cork, Routledge. 2001.

Romero Mauricio. *Paramilitares y Autodefensas 1982-2003*. IEPRI, Bogotá, 2003.

Rotberg Robert J & Thompson Dennis. *Truth vs Justice*. Princeton University Press. New Jersey, 2000.

Springer Natalia. *Sobre la verdad en los tiempos del miedo: Del establecimiento de una Comisión de la Verdad en Colombia y los desafíos para la justicia restaurativa*. Universidad Externado de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno y de Relaciones Internacionales. Bogotá, 2002.

Villarraga Sarmiento Álvaro. *Desmovilización, un camino hacia la paz*. Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, 2005.

Villamizar, Darío. *Un adiós a la guerra. Memoria histórica de los procesos de paz en Colombia*. Planeta Colombiana Editorial S.A. Santa fe de Bogotá, 1997.

Capítulos de libros

Foucault, Michael. “*La guerra en la filigrana de la paz*” en *Genealogía del racismo. De la guerra de las razas al racismo de Estado*, Madrid, La Piqueta, 1992

Lefranc Sandrine. “Políticas del perdón”. Editorial Norma, Bogota D.C., 2005.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. “*El conflicto. Orígenes: la guerra en las regiones. Expansión: una guerra de perdedores. Degradación: una guerra de perdedores*” en *Informe Nacional de Desarrollo Humano, “Colombia: callejón con salida”*, Colombia 2003.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. “*Una estrategia integral. Atender a las víctimas: retorno, reparación y reconciliación. Pactar la paz: implicaciones para una negociación*” en *Informe Nacional de Desarrollo Humano, “Colombia: callejón con salida”*, Colombia 2003.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. “*Los otros actores. La cosa es con todos: sociedad civil y comunidad internacional*” en *Informe Nacional de Desarrollo Humano, “Colombia: callejón con salida”*, Colombia 2003.

Ramelli, Alejandro. “*Aportación de la obra de Emmes de Vathel a la regulación internacional de los conflictos armados internos*” en *Derecho Internacional Humanitario y estado de beligerancia*. Universidad

Externado de Colombia, Serie de Teoría jurídica y filosofía del derecho,
No 12, Bogotá, julio 1999

Villarraga Sarmiento, Álvaro. “*Los acuerdos humanitarios. La aplicación del Derecho Internacional Humanitario y los acuerdos humanitarios en Colombia*” en *Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Problemática y aplicación*. Tomo II. TM Editores, OACP, Bogotá

Documentos Oficiales

Acta de compromiso. *Reunión de Comandantes AUC*. Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Febrero 13 de 2003.

Acuerdo de *Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia*. Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Julio 15 de 2003.

Comunicado de prensa sobre la demanda a la ley 975 de 2005 “Ley de Justicia y Paz”. República de Colombia, Corte Constitucional. Bogotá, mayo 18 de 2006.

Declaración AUC. *Acto de fe por la paz*. Octubre 7 de 2004.

Discurso del Comandante Salvatore Mancuso ante el Congreso de la República. Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Bogotá, julio 28 de 2004.

Exposición de motivos proyecto de ley 211 de 2005 Senado. “*Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera*”

efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios". Gaceta del Congreso No. 289, mayo 25 de 2005.

Informe Ejecutivo *Proceso de paz con las Autodefensa*. Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Bogotá, junio de 2006.

Ley 782 de 2002. *Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones*. Bogotá, diciembre 22 de 2002.

Ley 975 de 2005. *Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios*. Bogotá, junio 25 de 2005.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Julio 17 de 1998.

Convenio *entre el Gobierno de la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para el acompañamiento al proceso de paz en Colombia*. Febrero 4 de 2004.

Artículos de Revistas

De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. "*El caleidoscopio de las justicias en Colombia*", Colciencias, Ed Uniandes, Universidad de Coimbra, Universidad Nacional, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2001.

González Zapata, Julio. “Verdad, justicia, paz y reparación en la mitología penal. A propósito de la ley 975 de 2005”, en Estudios Políticos No. 27, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, Medellín, julio-diciembre de 2005.

Documentos inéditos

Kjell-Ake Nordquist, “La reconciliación como concepto político: algunas observaciones y comentarios”, Uppsala, Suecia, 2005.

Artículos Periódicos

Cecchini Daniel. “Argentina: memoria, verdad y justicia”. Semanario El Espectador. Bogotá, semana del 19 al 25 de marzo de 2006.

Duzán María Jimena. “Reculada en tres actos”. Periódico El Tiempo. Bogotá, mayo 22 de 2006.

García Villegas Mauricio. “Estado sin jueces”. Periódico El Tiempo. Bogotá, mayo 30 de 2006.

Laverde Palma Juan David. “Demandar ante la Corte Interamericana es un negocio. Semanario El Espectador. Bogotá, semana del 19 al 25 de marzo de 2006.

Pardo rueda Rafael. “Con el pecado y sin el género”. Periódico El Tiempo. Bogotá, mayo 29 de 2006.

Pizarro Leongómez Eduardo. “La decisión de la Corte”. Periódico El Tiempo. Bogotá, mayo 22 de 2006.

Pizarro Leongómez Eduardo. “Compas, recompas y revueltos”. Periódico El Tiempo. Bogotá, junio 19 de 2006.

Redacción Judicial. “Justicia y paz: en la vía de la inconstitucionalidad”. Semanario El Espectador. Bogotá, semana del 9 al 15 de abril de 2006.

Sabogal R. Cesar A. “La clave está en olvidar el pasado”. Periódico El Tiempo. Bogotá, marzo 31 de 1996.

Torres Martínez Jhon. “12 mil ex “paras” dejarán de recibir auxilio del Gobierno”. Periódico El Tiempo. Bogotá, julio 8 de 2006.

Páginas de Internet

Comisión Internacional de Juristas, Comunicado de prensa, 23 de junio de 2005, disponible en <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/limpu2.html>

Fundación Ideas para la paz. Boletín N.1 del Observatorio de la Comunidad Internacional, “Las propuestas y acciones más relevantes de la comunidad internacional en el conflicto armado en Colombia”, disponible en <http://www.ideaspaz.org/proyecto05/boletines/boletin01.htm>

Human Rights Watch, Colombia- “Proyecto deja intactas las estructuras paramilitares”. Washington, 15 de junio de 2005, disponible en http://www.hrw.org/spanish/press/2005/colombia_paras_ley.html

Meltzer, Judy. “Justicia transicional y reconciliación en Colombia luego del conflicto armado: consideraciones para una posible cooperación canadiense”, julio de 2004, disponible en http://www.focal.ca/pdf/colombia04_

Montaña, Tatiana. “La diplomacia europea frente a la Ley de Justicia y Paz”,
Bogotá, octubre 13 de 2005, disponible en
<http://www.voltairenet.org/article129627.html>

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. “Sin la verdad no puede haber justicia y reparación, ni
paz y reconciliación”, Bogotá D.C., junio 13 de 2005, disponible en
<http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2005/cp0534.pdf>

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Consideraciones sobre la Ley de “Justicia y Paz”,
Bogotá 27 de junio de 2005, disponible en
<http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2005/cp0535.pdf>

Sanguino P, Antonio. “Desmovilización de las AUC: rectificación o catástrofe”,
disponible en
<http://www.vivalaciudadania.org/cajavirtual/svc0018/articulo01.pdf>

Torres Cárdenas, César. “La administración de justicia y la construcción de la paz
en Colombia (Reflexiones acerca del papel de la justicia en el diálogo
Estado-paramilitares)”, noviembre 2004, disponible en
http://www.focal.ca/pdf/colombia04_2.pdf